

Distr.  
LIMITADA

TD/B/RBP/L.58/Add.1  
26 de noviembre de 1992

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO  
Grupo Intergubernamental de Expertos  
en Prácticas Comerciales Restrictivas  
11º período de sesiones  
Ginebra, 23 de noviembre de 1992  
Tema 8 del programa

PROYECTO DE INFORME DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS  
EN PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS SOBRE SU 11º PERIODO

DE SESIONES

celebrado en el Palacio de las Naciones, Ginebra,  
del 23 al 27 de noviembre de 1992

Relator: Sr. Donald PARTRIDGE (Canadá)

Adición

INDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. EXAMEN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA EXPERIENCIA DERIVADA DE LA APLICACION DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y NORMAS EQUITATIVOS CONVENIDOS MULTILATERALMENTE PARA EL CONTROL DE LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS (tema 3 del programa)		
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DISPOSICIONES CONCRETAS DEL CONJUNTO (tema 4 del programa)		
PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS (tema 5 del programa) ....	22 - 46	2

Capítulo I (continuación)

EXAMEN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA EXPERIENCIA DERIVADA DE LA  
APLICACION DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y NORMAS EQUITATIVOS  
CONVENIDOS MULTILATERALMENTE PARA EL CONTROL DE LAS PRACTICAS  
COMERCIALES RESTRICTIVAS

(Tema 3 del programa)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DISPOSICIONES CONCRETAS DEL CONJUNTO

- a) ESTUDIO SOBRE LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS EN  
RELACION CON LAS DISPOSICIONES DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS  
Y NORMAS
- b) INFORMACION Y CONSULTAS SOBRE LAS PRACTICAS COMERCIALES  
RESTRICTIVAS
- c) LEY O LEYES TIPO PARA EL CONTROL DE LAS PRACTICAS  
COMERCIALES RESTRICTIVAS Y MANUAL DE LEGISLACION SOBRE  
PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS
- d) PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA, ASESORAMIENTO Y  
CAPACITACION SOBRE PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS

(Tema 4 del programa)

PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE LAS PRACTICAS COMERCIALES  
RESTRICTIVAS

(Tema 5 del programa)

22. El representante de Italia expuso algunos de los rasgos de la Ley italiana de defensa de la competencia aprobada en octubre de 1990, que estaba basada en los mismos criterios generales que los de la ley tipo. La ley italiana se aplicaba lo mismo a las empresas privadas que a las públicas. El organismo encargado de aplicar la ley respondía de sus actos ante el Parlamento, a fin de garantizar su independencia. Tenía facultades para recomendar modificaciones de la ley para que ésta se ajustara más a los principios de la libre competencia, con lo cual el organismo de defensa de la competencia se ocupaba no sólo de la represión de los monopolios sino también de la política de la competencia. En el desempeño de sus funciones, el citado organismo había intervenido en sectores muy regulados tales como las telecomunicaciones, las compras del sector público y el comercio al por menor. Su experiencia por lo que hacía a la aplicación de la ley contra las prácticas restrictivas de la competencia era similar a la de las autoridades de defensa de la competencia de otros países. El organismo había tenido que intervenir sobre todo en las industrias del cemento, los productos lácteos y la eliminación de residuos.

23. El representante de Sri Lanka dijo que la Comisión de Comercio Leal, que había empezado a funcionar en 1987, podía investigar las situaciones de monopolio y las prácticas restrictivas de la competencia, pero en el caso de las fusiones únicamente podía hacerlo una vez llevada a cabo la fusión. Según una propuesta efectuada por el Consejo de Ministros de Sri Lanka, se iba a modificar la Ley N° 1 de 1987 por la que se había creado la Comisión de Comercio Leal, con el fin de facultar a ésta para investigar también los proyectos de fusiones. En las últimas semanas su país había levantado los controles sobre los precios del pan y la harina de trigo, con lo cual los productos farmacéuticos eran los únicos que estaban sometidos a un control de ese tipo. La razón de haber derogado los artículos 18 a 26 de la Ley de creación de la Comisión de Comercio Leal y suprimido la vigilancia de los precios era que su Gobierno quería crear una verdadera economía de mercado en la que las empresas pudieran competir con toda libertad.

24. Tras señalar que en la versión revisada del estudio de la UNCTAD sobre la concentración del poder de mercado (TD/B/RBP/80/Rev.1) se habían tenido en cuenta las observaciones hechas en el décimo período de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos, pidió a la secretaría que ultimara el estudio. En relación con el esquema de un posible nuevo estudio sobre aspectos de la política de la competencia relacionados con la industrialización en los países en desarrollo que había preparado la secretaría, dijo que los rasgos más destacados de la nueva política de industrialización de Sri Lanka eran animar a los industriales del sector privado a desempeñar el papel de motor del desarrollo rápido de la industria en todo el país, fomentar las industrias orientadas a la exportación e introducir un nuevo programa de reformas industriales combinado con la racionalización de la estructura del arancel de aduanas. En enero de 1991 se había establecido una Comisión de Industrialización para coordinar las políticas y los programas industriales.

25. Su Gobierno había dado toda clase de estímulos a la inversión extranjera, y muchas empresas internacionales, tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, habían invertido en diversas industrias en Sri Lanka. Las tres zonas comerciales francas que se habían establecido con objeto de mejorar la coordinación habían sido agrupadas en una sola a la que se había dado el nombre de "zona franca económica". Esta zona se había ampliado todavía más haciendo extensivos los estímulos previstos a las industrias de

página 4

exportación de cualquier parte de la isla. Agregó que 60 empresas del sector público habían sido privatizadas o entregadas entera o parcialmente a sus trabajadores durante los tres años últimos; esas empresas comprendían desde fábricas textiles hasta fábricas de loza, destilerías, fábricas de abonos, compañías de navegación y fábricas de cemento, entre otras. Los nuevos propietarios privados eran tanto extranjeros como locales y entre ellos había empresas del Japón, Noruega, Suiza, la República de Corea, la India y varios otros países.

26. El representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dijo que el Gobierno británico había confirmado recientemente su compromiso de sustituir la Ley de prácticas restrictivas de la competencia de 1976, que regulaba los acuerdos entre empresas, por una ley nueva. La ley vigente solamente regulaba los acuerdos relativos a bienes y se basaba en la estructura del acuerdo. Si el acuerdo caía dentro de las disposiciones de la ley, tenía que ser registrado en la Dirección General de Comercio Leal, que estaba obligada a remitirlo al Tribunal de Prácticas Restrictivas, el cual podía prohibir el acuerdo si era contrario al interés público. El Gobierno había llegado a la conclusión de que el sistema de la ley vigente era muy poco flexible y lento; con demasiada frecuencia se aplicaba a acuerdos que no ocasionaban ningún perjuicio a la libre competencia, mientras que no se utilizaba para reprimir como era necesario los acuerdos restrictivos de la competencia. La nueva ley sería promulgada cuando el Parlamento tuviera tiempo para discutirla y estaría basada en disposiciones análogas a las del artículo 85 del Tratado de Roma. El texto de la nueva ley se aplicaría a todo acuerdo que tuviera por objeto o resultado restringir la competencia en el Reino Unido.

27. El Reino Unido daba gran importancia a la libre competencia y a la necesidad de que los Estados miembros dispusieran de leyes en la materia y las aplicaran. La labor llevada a cabo por la secretaría de la UNCTAD sobre la ley tipo sería muy útil. Los países que habían promulgado leyes de defensa de la competencia y tenían experiencia en su aplicación podían ayudar a los que quisieran promulgar leyes análogas. La ayuda que podrían prestar ya estaba definida en la resolución adoptada por la Segunda Conferencia de Examen de 1990. Desde el décimo período de sesiones del Grupo Intergubernamental el Reino Unido había prestado una asistencia técnica considerable a otros países. Funcionarios de la Oficina de Comercio Leal habían hecho un total de

seis visitas a otros países para prestar asesoramiento técnico (dos veces a la Federación de Rusia, otras dos a Checoslovaquia, una a Lituania y otra a China) con el fin de ayudar a estos países a redactar y promulgar leyes de defensa de la competencia. Además, habían visitado el Reino Unido 37 misiones de 23 países de todas las partes del globo, y funcionarios de diversos países habían sido enviados a formarse en la Oficina de Comercio Leal. Estos visitantes habían venido de Kenya, China, Jamaica y Rusia.

28. La secretaría había redactado una lista indicativa de peticiones de consulta que, aunque resultaría útil, había que considerarla como una guía flexible. Los países no deberían tener ningún reparo en dirigirse a las autoridades de defensa de la competencia cuyas direcciones figuraban en una lista anexa, las cuales podrían ayudarles a la vista del gran número de puntos que comprendía la lista de peticiones de consulta.

29. Los períodos anuales de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos constituían un foro excelente para que los expertos en problemas de la competencia intercambiaran sus experiencias. En este sentido el Reino Unido celebraba la tendencia manifestada desde la VIII UNCTAD a dar una mayor flexibilidad a las deliberaciones de las reuniones de la UNCTAD. Había que felicitar a la secretaría por la admirable calidad de los documentos que había preparado para el período de sesiones.

30. El representante del Canadá dijo que la génesis de la política de competencia del Canadá se remontaba a hacía más de 100 años. La modernización de la normativa legal de defensa de la competencia había sido una cuestión de orden público larga e intensamente debatida. El proceso se había iniciado en 1965 con la remisión al Consejo Económico del Canadá y la primera fase había concluido sólo en 1976 con la extensión del ámbito de aplicación de la ley al sector de los servicios. Este proceso había culminado en 1986 con la promulgación de la Ley de defensa de la competencia y la Ley del Tribunal de Defensa de la Competencia. Entre los cambios introducidos figuraban nuevos procedimientos de investigación, para ponerlos en consonancia con la Carta de Derechos y Libertades de 1982, un nuevo proceso civil de verificación de las fusiones y una disposición moderna sobre el abuso de posición dominante en el mercado.

31. Una de las principales dificultades de la aplicación de la normativa antitrust en los últimos años había sido hacer frente a las múltiples impugnaciones de fondo y de forma de diversos aspectos de la legislación

página 6

formuladas en virtud de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Aunque una serie de resoluciones judiciales habían frenado los progresos en varios casos importantes, los tribunales habían expresado su apoyo a los principios que inspiraban varias disposiciones esenciales de la Ley de defensa de la competencia, reduciendo considerablemente la incertidumbre en lo que respecta a la aplicabilidad de tales disposiciones.

- La constitucionalidad de las disposiciones de fijación de precios de la ley había sido mantenida inequívocamente por un fallo unánime del Tribunal Supremo del Canadá.
- En julio de 1992, el Tribunal Supremo había fallado que el Tribunal de Defensa de la Competencia tenía potestad para hacer ejecutar sus decisiones mediante la instrucción de un procedimiento por obstrucción a la justicia. El asunto de que se trataba versaba sobre un proceso por obstrucción a la justicia incoado ante el Tribunal contra Chrysler Canada por no atenerse al tenor de su resolución sobre el reaprovisionamiento de un exportador de piezas de automóvil.
- El Tribunal Supremo había mantenido la constitucionalidad de las disposiciones de la ley relativas a la publicidad engañosa.
- El Tribunal Supremo había denegado su autorización para recurrir contra una decisión unánime del tribunal de apelaciones por la que se afirmaba la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley sobre fusiones y la del Tribunal de Defensa de la Competencia.
- El Tribunal de Defensa de la Competencia había dictado recientemente decisiones en los dos primeros casos de fusión en procedimiento plenamente contradictorio en virtud de la Ley de defensa de la competencia de 1986, así como su segunda decisión sobre abuso de dominio.
- En el asunto Laidlaw se había incoado un proceso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia en virtud de las disposiciones sobre abuso de dominio de la Ley de defensa de la competencia. La parte demandante había solicitado reparación con respecto a ciertas conductas, en particular la inclusión de cláusulas restrictivas en los contratos, los procesos simulados y la adquisición de pequeños competidores, que tenían por objeto crear y proteger una posición dominante en el mercado de servicios de eliminación de residuos.

32. Las directrices para la ejecución de la legislación sobre la libre competencia, en particular, se habían convertido en un instrumento importante al que recurría la Oficina de Defensa de la Competencia para definir y aclarar su política y sus métodos de ejecución de la legislación. El año pasado esa oficina había dictado sendas directrices sobre la discriminación en los precios y sobre la fijación de precios abusivos, que habían venido a engrosar las directrices ya publicadas sobre las fusiones y sobre la publicidad engañosa.

33. El representante de Egipto destacó la importancia del actual período de sesiones del Grupo Intergubernamental por tratarse del primero después de la VIII UNCTAD. La Conferencia había reforzado el mandato del Grupo Intergubernamental de Expertos por lo que se refería a las políticas y normas para el control de las prácticas comerciales restrictivas con el fin de fomentar la competencia, promover el funcionamiento adecuado de los mercados y la asignación eficaz de los recursos, así como para lograr una mayor liberalización del comercio internacional. Esto último era importante en vista de los resultados previstos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales que estaba a punto de establecer un nuevo orden comercial en el mundo. Era evidente la adhesión de su país al Conjunto de principios y normas aprobado en 1980, como podía verse por la transformación que estaba teniendo lugar en Egipto con objeto de establecer una economía de mercado. Las reformas realizadas a ese respecto incluían la eliminación de las limitaciones gubernamentales al comercio y, en particular, la liberalización de las importaciones. La importancia concedida al sector privado de la economía había aumentado. Si bien no existía una legislación general para el control de las prácticas comerciales restrictivas, Egipto había adoptado medidas con el fin de que la competencia desempeñase plenamente su papel en la economía y ello tendría indudablemente resultados positivos. Sin embargo, era de señalar que mientras los países en desarrollo liberalizaban sus economías para favorecer la competencia, los países desarrollados y, más particularmente, sus empresas transnacionales, no respetaban plenamente los principios y normas convenidos. En su opinión debería darse un carácter imperativo al Conjunto para aplicarlo a todos los Estados.

página 8

34. En relación con la ley tipo, subrayó la importancia del objetivo concerniente al desarrollo económico. Expresó la esperanza de que se alcanzase un acuerdo sobre su texto, de manera que se pudiera disponer de la versión definitiva lo antes posible.

35. También llamó la atención sobre la necesidad de asistencia técnica en la esfera de las prácticas comerciales restrictivas, como se pedía en el Conjunto. Subrayó además la necesidad de que el Grupo Intergubernamental de Expertos considerase con mayor detenimiento las prácticas comerciales restrictivas en los sectores de servicios de interés para los países en desarrollo, y cooperase en esa esfera con la Comisión Permanente encargada de los servicios.

36. El representante de Checoslovaquia declaró que la economía de su país estaba en una fase de transición de la planificación centralizada a la economía de mercado y que esa fase se caracterizaba por muy bajos niveles de competencia. Señaló que en la privatización de muchas empresas propiedad del Estado que estaba teniendo lugar en su país, se dedicaba una atención especial en someter a las firmas privatizadas a las fuerzas del mercado. Así pues, en ese proceso se presentaban grandes oportunidades de robustecer la competencia. Manifestó que la Ley N° 63 de defensa de la competencia, que había entrado en vigor el 1° de marzo de 1991, constituía el marco legal para impedir las limitaciones ilícitas de la competencia. Los compromisos dimanantes del Conjunto de principios y normas estaban comprendidos en esa ley. La facultad de controlar la competencia correspondía al Ministerio de Competencia Económica en la República Checa y a la Oficina de Lucha contra los Monopolios en la República Eslovaca. Añadió que las actividades de las oficinas de lucha contra los monopolios se centraban en las siguientes esferas: i) los acuerdos de cártel, las fusiones y los abusos de la posición de dominio de los empresarios en el mercado; ii) las opiniones sobre los análisis de los proyectos de privatización de compañías con una posición monopolística o de dominio; iii) la adopción de otras disposiciones para estimular la competencia económica, por ejemplo, en la esfera de las compras del sector público y la regulación de los monopolios naturales. Las oficinas de lucha contra los monopolios concedían particular importancia a la cooperación internacional y al intercambio de experiencias con las autoridades responsables de la competencia de otros países y organizaciones con las que se habían establecido contactos.



37. El representante de la Comisión de las Comunidades Europeas dijo que la Comisión apoyaba plenamente los objetivos principales del Conjunto de principios y normas, con el fin principalmente de asegurar que las prácticas comerciales restrictivas no estorbasen o menoscabasen la realización de los beneficios que se derivarían de la liberalización de las barreras arancelarias y no arancelarias. La Comisión se adhería a ese objetivo del Conjunto tanto por lo que se refería a su comercio interior como a su comercio exterior. Las normas comunitarias en la esfera de la libre competencia eran muy completas y abarcaban múltiples aspectos. Además de aplicarlas activamente tanto a las empresas públicas como a las privadas, la Comisión había acentuado últimamente sus esfuerzos por aplicar las normas comunitarias sobre la libre competencia a sectores hasta el momento "olvidados" tales como los servicios públicos, con el fin de lograr que existiese una competencia auténtica en todos los sectores, principalmente en las telecomunicaciones, la energía, el abastecimiento de agua y los transportes. La Comunidad también incluía las ayudas estatales en su control de la competencia.

38. La Comunidad había intentado negociar la inclusión de normas sobre la libre competencia igual de completas en los acuerdos comerciales bilaterales que había firmado con varias otras naciones, incluidos países en desarrollo. Los acuerdos con Polonia, Hungría y Checoslovaquia incluían importantes disposiciones relativas a la competencia. Lo mismo podía decirse del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1º de enero de 1993, y de los acuerdos con países en desarrollo de América Latina, África y Asia. La Comunidad Europea reconocía plenamente la importancia de la política relativa a la competencia en cuanto instrumento para la liberalización del comercio y estaba dispuesta a proporcionar asistencia técnica en esa esfera tanto a los países en desarrollo como a los demás.

39. El representante de la República de Corea dijo que su país había promulgado la Ley de monopolios y comercio leal en abril de 1981, un año después de la aprobación del Conjunto de principios y normas, y había establecido su Comisión de Comercio Leal de conformidad con esa Ley. En la etapa inicial de aplicación de la ley, la Comisión había regulado principalmente las prácticas comerciales desleales, tales como las negativas injustificadas de concluir tratos, la discriminación en los precios y otras condiciones de las transacciones, y el abuso de una posición dominante. Desde

página 10

mediados del decenio de 1980, la Comisión había centrado sus esfuerzos en el robustecimiento de las medidas contra la concentración de poder en el mercado y las prácticas comerciales desleales. Con el fin de alcanzar esos objetivos de una manera más eficaz se había modificado la ley tres veces: en 1986, en 1989 y en 1992.

40. Añadió que la Comisión de Comercio Leal había logrado estimular la competencia libre y equitativa en su país, y ello había conducido al aumento del bienestar de los consumidores y a la competitividad de las firmas nacionales. Esos resultados positivos se habían reforzado mediante unas activas medidas de desreglamentación en varias esferas, con inclusión de la liberalización del comercio exterior y las inversiones extranjeras, lo que había incrementado la competencia en el país. Además, la Comisión estaba aplicando estrictamente varias medidas adoptadas en el marco de la ley para restringir la concentración del poder económico. De hecho, en noviembre de 1992, su país acababa de revisar la Ley de comercio leal para dar mayor severidad a las restricciones impuestas a las participaciones accionariales cruzadas y a los límites de la inversión de capital en el caso de las grandes agrupaciones de empresas. Añadió que la Comisión también había desplegado esfuerzos para controlar las actividades colusorias de las firmas y las prácticas comerciales restrictivas de las asociaciones mercantiles. Además, había robustecido su cooperación con las autoridades extranjeras de defensa de la competencia y las organizaciones pertinentes. Por ejemplo, en septiembre de 1991 se había celebrado en Corea la Conferencia Internacional sobre Política de la Competencia y Crecimiento Económico, copatrocinada por el Instituto Coreano de Desarrollo y la UNCTAD.

42. Para concluir, llamó la atención sobre las prácticas contrarias a la competencia, tales como las limitaciones voluntarias de las exportaciones y los acuerdos de ordenación del mercado, que conducían a la cartelización de las exportaciones. Era necesario que la UNCTAD se ocupase adecuadamente de esas restricciones.

43. La representante de Filipinas dijo que su país había emprendido un vasto programa de reestructuración económica caracterizado por una estrategia agresiva enfocada al mercado. Para el decenio de 1990 el Gobierno filipino había puesto en marcha un programa de liberalización del comercio cuyo objeto sería reducir las barreras arancelarias y no arancelarias. También se habían adoptado en otros sectores de la economía políticas que favorecían el libre

juego de las fuerzas del mercado. En junio de 1991 el Parlamento filipino había promulgado la Ley de inversiones extranjeras, conforme a la cual la participación del capital extranjero en una sociedad filipina podía alcanzar el 100%, salvo en un pequeño número de sectores. En 1992 se había dado también un paso importante hacia la desregulación con la liberalización del régimen de cambios. Su país había iniciado además un ambicioso programa de privatización con la creación de la Comisión de Privatizaciones. Asimismo estaba en discusión un proyecto de ley para reestructurar el sistema bancario.

43. Añadió que en los documentos de la UNCTAD TD/B/RBP/89 e ITP/63 se hacía un análisis de las leyes y políticas de la competencia en Filipinas. La política nacional de lucha contra la competencia desleal estaba proclamada en la propia Constitución y había sido recogida en una serie de textos legislativos y administrativos cuya aplicación corría a cargo de diversos organismos públicos, como eran el Departamento de Comercio e Industria, la Comisión de Bolsa y Valores, el Banco Central, etc. Se estaba intentando fortalecer y racionalizar la legislación sobre la libre competencia mediante una serie de proyectos de ley que perseguían: 1) la adopción de un amplio cuerpo coherente de normas legales sobre la libre competencia; 2) el desarrollo del marco institucional mediante la creación de una Comisión de Represión de los Monopolios; y 3) el fortalecimiento del mecanismo de ejecución de la legislación mediante la creación de una Fiscalía de Lucha contra los Monopolios. Agregó que las medidas que adoptaba su país en esta esfera habían contado con el generoso asesoramiento técnico de instituciones internacionales como la UNCTAD. Los días 20 y 21 de noviembre de 1991 se había celebrado en Manila una reunión técnica regional sobre prácticas restrictivas de la competencia para los países de la ANASO, con la participación de expertos de Noruega y los Países Bajos.

44. Señaló que las deliberaciones que había habido en el Grupo Intergubernamental de Expertos habían estado dedicadas casi exclusivamente a un análisis de las políticas nacionales en materia de prácticas restrictivas de la competencia desde el ángulo puramente interno. Ahora bien, las leyes que adoptaban los distintos países en el campo de la competencia tenían por objeto, al poner trámites a la jurisdicción nacional, promover los intereses económicos nacionales solamente y no trataban para nada de conciliar los intereses opuestos de los distintos países. Quizá fuera oportuno en el

página 12

momento presente explorar las posibilidades de intensificar la cooperación internacional en relación con las prácticas de competencia desleal. En primer lugar, habría que afianzar el Conjunto de principios y normas dándole un carácter jurídicamente vinculante. Ya se habían tomado iniciativas en otras tribunas en ese sentido, por lo que se podría hacer lo mismo en el Grupo Intergubernamental de Expertos. En las negociaciones de la Ronda Uruguay se habían incluido disposiciones sobre las prácticas restrictivas de la competencia en el proyecto de acuerdo relativo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y en el proyecto de acuerdo general sobre el comercio de servicios. En dichas disposiciones se preveía además que en el plano nacional se adoptarían leyes para combatir las prácticas restrictivas de la competencia y que en el plano internacional se compartiera la información y se crearan mecanismos de consulta. En segundo lugar, era posible combatir en el plano multilateral general las conductas contrarias a la libre competencia. Se solía afirmar que las actividades que desarrollaban las empresas privadas fuera de los países donde tenían su domicilio social era un asunto que caía exclusivamente dentro del ámbito de la legislación de la competencia de los países extranjeros donde operaban aquellas empresas. Ahora bien, las leyes internas sobre la libre competencia por sí solas ofrecían un medio imperfecto de proteger la vitalidad de la libre competencia en la era actual. Un estudio efectuado en 1991 con los auspicios del Banco Mundial, titulado The Basics of Anti-Trust Policy, había demostrado que las políticas nacionales y las políticas internacionales en materia de libre competencia se reforzaban mutuamente. Un ejemplo lo constituían las políticas de lucha contra los monopolios de los Estados Unidos y la Comunidad Europea, que se aplicaban no sólo a los intercambios económicos dentro del territorio del Estado o país miembro interesado sino también a las actividades que se realizaban fuera de las fronteras nacionales de ese Estado o país. El Grupo Intergubernamental de Expertos podía aprender de lo que habían hecho los Estados Unidos y la Comunidad Europea para desarrollar la cooperación encaminada a controlar las prácticas restrictivas de la competencia a través de las fronteras nacionales.

45. El representante de Francia se refirió a las consultas multilaterales que debían tener lugar durante el presente período de sesiones y en las que su delegación se había ofrecido a exponer el tema de los derechos de los demandados en las investigaciones y actuaciones de expedientes instruidos por

restricciones a la libre competencia. En relación con esto, su Gobierno había presentado una ponencia que se había distribuido con la signatura TD/B/RBP/91. Agregó que el Grupo Intergubernamental de Expertos era una tribuna excelente para los contactos entre las autoridades de defensa de la competencia de todos los países del mundo.

46. Con respecto a la aplicación de la legislación sobre la competencia, enumeró los tres rasgos principales que caracterizaban la política de las autoridades francesas en la materia. Esos rasgos eran: i) la regulación de la competencia para fomentar el equilibrio del mercado; ii) el respeto al principio de la transparencia en las relaciones entre socios económicos; y iii) una actuación diaria para fomentar la lealtad en las transacciones comerciales.

-----